

# Mapeo de Procesos de Resistencia Civil Indígenas ante Proyectos Extractivistas en la Zona Sur de los Andes (1990-2020)

María Francesca Rodríguez Vargas<sup>1</sup>, Diego Checa Hidalgo<sup>2</sup>

## RESUMEN

Este artículo estudia los procesos de resistencia indígena surgidos durante conflictos socioambientales ante proyectos extractivistas desarrollados en zonas andinas y preandinas de Argentina, Bolivia y Chile, desde 1990 hasta 2020. Identifica, especialmente, aquellas luchas de comunidades que han recurrido mayoritariamente al empleo de metodologías de acción no violenta para alcanzar sus objetivos. A partir de un análisis documental, la investigación ha encontrado 129 casos de este tipo de luchas, situándose casi la mitad de ellas en territorio chileno y señalando a la minería como la principal actividad extractiva implicada en esos conflictos socioambientales. Estas resistencias indígenas son protagonizadas mayoritariamente por las comunidades mapuche y en ellas destacan principalmente dos demandas: Que se mejore el sistema de gestión de residuos y se reparen los daños causados por dichos proyectos, y por otro lado, que se respete el derecho a la consulta previa antes del inicio de proyectos extractivistas. En estos procesos de resistencia civil no solo se han utilizado métodos de protesta y persuasión, sino que también se ha recurrido significativamente a la intervención no violenta mediante el desarrollo de acciones directas.

**Palabras clave:** no violencia; comunidades indígenas; conflictos socioambientales; extractivismo; justicia ambiental.

<sup>1</sup> Doctoranda en Ciencias Sociales (Universidad de Granada, España). ORCID: 0000-0002-9308-2978, e-mail: mfrodvar@gmail.com

<sup>2</sup> Doctor en Historia Contemporánea (Universidad de Granada, España). Investigador y docente en Universidad de Granada, España. ORCID: 0000-0002-3269-0240, e-mail: diegoch@ugr.es

Este artículo tiene como objetivo identificar los procesos de resistencia civil llevados a cabo por comunidades indígenas en América Latina en el marco de conflictos socioambientales ante proyectos extractivistas y se centra, especialmente, en las campañas que se producen en zonas andinas y preandinas de Argentina, Bolivia y Chile, desde 1990 hasta 2020. Al abordar los extractivismos en el territorio latinoamericano, se hace alusión a la explotación a gran escala de materias primas sin procesamiento, tratándose de recursos no renovables<sup>3</sup> y también renovables, pero que son explotados industrialmente a gran escala.

Son fenómenos que actualmente no solo incorporan los rubros extractivos históricamente tradicionales como la minería o la extracción de hidrocarburos, sino que, incluyen rubros como el forestal con la explotación de bosques, la agroganadería con los monocultivos y la reproducción industrial de animales para consumos humanos, así como la piscicultura<sup>4</sup>. Del mismo modo, en esta línea de “ampliar” la comprensión de los extractivismos, el agua no solo se puede explotar de manera secundaria como efecto colateral en proyectos mineros, por ejemplo, sino también de forma primaria en proyectos de generación de energía y servicios básicos como las hidroeléctricas<sup>5</sup>.

Las dinámicas extractivistas obedecen a relaciones de dominación que acontecen entre actores de la sociedad internacional y no solo corresponden a fenómenos particulares en lo local. Sin embargo, es en el ámbito local donde estos procesos se hacen visibles dando origen a conflictos socioambientales en los que se pueden apreciar no solamente los efectos violentos del extractivismo, sino también la cristalización de las resistencias a esos modelos de relaciones. En este sentido, nuestra investigación atiende a aquellos procesos de resistencia desarrollados por comunidades indígenas que recurren a instrumentos no violentos para transformar los conflictos.

---

<sup>3</sup> Eduardo Gudynas, “Extracciones, extractivismos y extrahecciones,” *Observatorio del Desarrollo*, no. 18 (2013): 1-18.

<sup>4</sup> Maristella Svampa, “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”. *OSAL*, no. 32 (2012): 15-38; José Seoane, “Modelo extractivo y acumulación por despojo”, en *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios*, ed. José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranti (Buenos Aires: Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL, 2013), 21-39.

<sup>5</sup> Edith Kauffer Michel, “Pensar el extractivismo en relación con el agua en América Latina: hacia la definición de un fenómeno sociopolítico contemporáneo multiforme,” *Sociedad y ambiente*, no. 16 (2018): 33-57. <https://doi.org/10.31840/sya.v0i16>

Particularmente, se aborda el periodo entre 1990-2020 ya que la década de 1990 es decisiva en América Latina para la comprensión de los fenómenos contemporáneos; especialmente por la consolidación de la minería a gran escala, favorecida por los altos precios de materias primas a nivel mundial que permitieron el incremento de la inversión minera en el territorio, cuatro veces más que en el resto del mundo, especialmente en Chile, Perú y Argentina. Además, marcos regulatorios flexibles y nuevas tecnologías permitieron explotar en sitios complejos<sup>6</sup>, sobre todo en la alta cordillera donde la explotación es más difícil por las distancias y dificultades de acceso, condiciones del terreno, el clima y hasta cuestiones relativas a la salud de trabajadores al realizar faenas en altura con riesgos de sufrir mal de altura o de montaña, soroche o apunamiento, es decir, manifestaciones físicas asociadas a la disminución de oxígeno en el cuerpo humano como consecuencia de la altura en zonas andinas.

A estas cuestiones se sumó la consolidación de una narrativa hegemónica neoliberal, que enfatiza en los beneficios económicos de los proyectos extractivistas y sus aportaciones al “desarrollo” de toda la población, omitiendo consecuencias socioambientales negativas que afectan directamente a las comunidades que habitan los territorios y de manera menos visible, a la población en general. Aquello, en un intercambio desigual que se puede comprender como una reciprocidad negativa<sup>7</sup>, es decir, la apropiación de recursos comunitarios mediante prácticas deshonestas, desreguladas y que aparentan ser beneficiosas económicamente.

El extractivismo no ha sido una novedad en la región, dado que tanto Argentina como Bolivia y Chile tienen una larga trayectoria de dinámicas extractivistas a gran escala, especialmente ligadas a la minería. Así, desde el siglo XVI en Potosí, Bolivia, se conocen situaciones de explotación y degradación en procesos de intercambio marcadamente desiguales que propiciaron el desarrollo europeo de la época. De manera similar, Chile tiene una historia temprana de extractivismo colonialista, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se produjo el despegue de la

---

<sup>6</sup> Anthony Bebbington, “Elementos Para Una Ecología Política de Los Movimientos Sociales y El Desarrollo Territorial En Zonas Mineras,” en *Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas. Una Ecología Política de Transformaciones Territoriales*, ed. Anthony Bebbington, (Lima: IEP: CEPES, 2007), 23-46; Iokiñe Rodríguez, et al., *Conflictividad socioambiental en Latinoamérica* (Ciudad de México: Friedrich Ebert Stiftung, 2019).

<sup>7</sup> Claudio Garibay et al., “Corporación minera, colusión gubernamental y desposesión campesina. El caso de Goldcorp Inc en Mazapil, Zacatecas,” *Desacatos. Revista de Ciencias Sociales*, no. 44 (2014): 113-142.

minería con la explotación de carbón, plata y salitre. Por su parte, Argentina es el país de este grupo con una menor tradición minera, ya que su rubro histórico ha estado mayormente ligado a la producción agroganadera<sup>8</sup>. En la actualidad, en estos territorios se han desarrollado proyectos extractivistas a gran escala con el uso de técnicas altamente cuestionadas por su impacto en los ecosistemas locales, como la minería a cielo abierto o la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

En los nuevos escenarios marcados por condiciones históricas que construyen la territorialidad, emergen los conflictos ambientales como elemento central del ecologismo de los pobres que no se corresponden con el ecologismo intelectual europeo, sino que emergen de la privación real de necesidades de las comunidades afectadas<sup>9</sup>. Aquellos conflictos, están marcados por la violencia estructural y cultural<sup>10</sup>, al propiciarse por estructuras invisibles que perpetúan la injusticia y la desigualdad social<sup>11</sup>. En el caso latinoamericano es necesario considerar el lugar periférico que ocupa este escenario en el mercado internacional y las relaciones de intercambio desigual y de dependencia que lo caracterizan, pero también la reproducción de esas mismas situaciones en cuanto a las relaciones entre los nortes y los sures de esa misma región.

Junto a esas estructuras aparecen una serie de consideraciones que justifican y legitiman esas estructuras generadoras de violencia, defendiendo las bondades de los modelos de desarrollo extractivistas y asignando valores en función de los criterios de un discurso hegemónico de un modelo civilizatorio neoliberal. Es en este contexto, donde, por ejemplo, surge el racismo ambiental<sup>12</sup>, ya que muchas de las comunidades

---

<sup>8</sup> Vicente Méndez, "Historia del desarrollo minero argentino," en *Recursos minerales de la República Argentina*, ed. Eduardo Zappettini (Buenos Aires: Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR, 1999), 5-25.

<sup>9</sup> Joan Martínez-Alier, *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. (Barcelona: Icaria, 2004). Ramachandra Guha, "El ecologismo de los pobres," *Ecología política* 8, no.2 (1995): 137-151. Recuperado de: <https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2015/12/8.pdf>

<sup>10</sup> Johan Galtung, *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. (Bilbao, País Vasco: Bakeaz, 1998).

<sup>11</sup> Johan Galtung, "Cultural Violence," *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (1990): 291-305; Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6, no. 3, (1969): 167-192.

<sup>12</sup> Kenneth Grossman, "Environmental racism," en *The racial economy of science: Toward a democratic future*, ed. Sandra Harding, (Bloomington: Indiana University Press, 1993), 326-334. Robert Bullard, "Anatomy of environmental racism and the environmental justice movement," en *Confronting environmental racism: Voices from the grassroots*, ed. Robert Bullard (Boston: South End Press, 1993), 15-39.

más afectadas por los proyectos extractivistas suelen ser comunidades en zonas sacrificables, indígenas, que no forman parte del Norte Global<sup>13</sup>.

Esto ha dado origen a numerosos conflictos entre comunidades indígenas, actores privados y el Estado especialmente a partir de 1990<sup>14</sup>. De este modo, la resistencia indígena se explica por la invasión territorial y privación de necesidades, pero también por cosmovisiones particulares del mundo que abordan la relación entre ser humano/naturaleza, y que se alejan de los principios capitalistas. Aquellas cosmovisiones indígenas se pueden conceptualizar en el castellano, lengua colonizadora, como “buen vivir”<sup>15</sup>, *sumak kawsay* en quechua o *küme mongen* en mapuzugun, enfatizando en el equilibrio con la naturaleza y contraponiéndose al extractivismo voraz. Desde perspectivas decoloniales podemos interpretar estas resistencias como una defensa de su propia existencia ante las violencias ejercidas por los procesos extractivistas<sup>16</sup>.

De este modo, se debe considerar el conflicto ambiental como un conflicto social relacionado con la calidad de vida de los habitantes de los territorios y las condiciones ambientales<sup>17</sup>, por lo cual, a partir de ahora se prioriza el uso del concepto “conflicto socioambiental”. Asimismo, desde la perspectiva de la Investigación para la Paz, los conflictos no se perciben a priori como negativos sino como una oportunidad de transformación hacia paz positiva<sup>18</sup> que comprenda la justicia social como complemento de la justicia ambiental en los territorios explotados. En este contexto, se aprecia cómo en América Latina existen iniciativas que se desarrollan en medio de conflictos socioambientales a partir de movimientos sociales y organizaciones de base que proponen acciones de autogobierno, ocupaciones, asambleas, plebiscitos y muchas otras más, sensiblemente diferentes de

<sup>13</sup> Boaventura De Sousa Santos, “Introducción: las epistemologías del Sur,” en *Formas-Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer*, ed. CIDOB, (Barcelona: CIDOB, 2011), 9-22.

<sup>14</sup> Pablo Dávalos, “Movimientos indígenas en América Latina: El derecho a la palabra,” en *Pueblos indígenas, Estado y democracia*, ed. Pablo Dávalos. (Buenos Aires: CLACSO, 2005), 17-33. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101026124338/2Davalos.pdf>

<sup>15</sup> Alberto Acosta, “The buen vivir: An opportunity to imagine another world,” en *Inside a champion: An analysis of the Brazilian development model*, ed. Dawid Danilo Bartelt (Río de Janeiro: The Heinrich Boll Foundation, 2012), 192-210. Recuperado de: [https://www.boell.de/sites/default/files/Inside\\_A\\_Champion\\_Democracy.pdf#page=194](https://www.boell.de/sites/default/files/Inside_A_Champion_Democracy.pdf#page=194); Eduardo Gudynas, “Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo,” *América Latina en movimiento* 462 (2011): 1-20.

<sup>16</sup> Antonio Ortega Santos et al., “De Reexistencias en el Sur Global. Aprendizajes de Acción”, en *Saberes bioculturales. En pie de Re Existencias en el Sur Global*, ed. Antonio Ortega Santos y Chiara Olivieri (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2020), 9-24.

<sup>17</sup> Alain Santandreu et al., *Ciudadanía en movimiento. Participación y conflictos ambientales* (Montevideo: FESUR, CLAES y Trilce, 1998).

<sup>18</sup> Johan Galtung, *Conflict transformation by peaceful means: The transcend method*. (UN, 1999); John Paul Lederach, *The little book of conflict transformation* (New York: Good Books, 2014).

las que se plantean desde posiciones más eurocéntricas que canalizan las demandas de la ciudadanía a través de organizaciones centralizadas en partidos o sindicatos, mediante las vías institucionales del Estado o a través de la lucha armada<sup>19</sup> de la teoría crítica europea.

En efecto, el artículo se aleja de esas lógicas para centrar su atención en las dinámicas de resistencia civil, entendidas como procesos de movilización y lucha colectiva que utilizan principalmente métodos de acción noviolenta para la transformación de conflictos. Una forma de lucha que entiende el poder más allá de la capacidad para ejercer coerción a través de la violencia y que entiende la desobediencia civil como una herramienta fundamental<sup>20</sup>. Esta forma de lucha colectiva privilegia una estrategia donde se recurre al uso sostenido de métodos de acción noviolenta en conflictos asimétricos en donde la contraparte no duda en usar la violencia<sup>21</sup>. Así, los procesos de resistencia civil despliegan una amplia gama de herramientas propias que incluyen múltiples métodos diferentes dirigidos a la transformación de los conflictos mediante la protesta y persuasión, la no-cooperación, la intervención noviolenta y la intervención creativa constructiva<sup>22</sup>.

El artículo está dividido en tres secciones. En la primera sección se aborda la metodología utilizada, prestando atención a los objetivos de la investigación, a la delimitación del objeto de estudio, a las fuentes utilizadas y a las categorías de análisis construidas. En la segunda sección se presentan los principales resultados alcanzados; mapeando y caracterizando los conflictos socioambientales identificados, atendiendo a los actores indígenas presentes, señalando sus principales demandas y analizando los métodos de acción noviolenta empleados en ellos. Finalmente, en la tercera sección, se mostrarán las conclusiones de la investigación.

---

<sup>19</sup> Boaventura De Sousa Santos, *Justicia Entre Saberes: Epistemologías Del Sur Contra El Epistemicidio* (Madrid: Ediciones Morata, 2017).

<sup>20</sup> Michael Randle, *Civil resistance* (Fontana: Fontana Press, 1994).

<sup>21</sup> Kurt Schock, "The practice and study of civil resistance," *Journal of Peace Research* 50, no. 3 (2013): 277-290. <https://doi.org/10.1177/0022343313476530>

<sup>22</sup> Gene Sharp, *Politics of Nonviolent Action, Part Two: The Methods of Nonviolent Action* (Manchester: Porter Sargent Publishers, 1973); Maciej Bartkowski, "Alternative Institution-Building as Civil Resistance," *Mind of the movement*, 13 de junio, 2018. Recuperado de: [https://www.nonviolent-conflict.org/blog\\_post/alternative-institution-building-civil-resistance/](https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/alternative-institution-building-civil-resistance/)

## METODOLOGÍA

La investigación para realizar este mapeo de procesos de resistencia civil indígenas ante proyectos extractivistas se ha construido a partir del análisis documental y la elaboración de cartografías digitales, mediante un enfoque multidisciplinar que ha sumado contribuciones de la Ciencia Política, la Sociología y Psicología Social, la Historia, la Geografía y la Investigación para la Paz. Las fuentes de estudio utilizadas han sido variadas, partiendo de una revisión bibliográfica de fuentes para establecer el estado de la cuestión sobre el objeto de análisis, a partir de artículos científicos, monografías e informes técnicos. También se utilizaron otras fuentes como bases de datos y cartografías para avanzar en la identificación de estos procesos.

Ha sido de especial importancia la información obtenida del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)<sup>23</sup> y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)<sup>24</sup>, que operan como recopiladores de información de distintos conflictos socioambientales en América Latina. Además, se recurrió a la consulta de las bases de datos de No a la Mina<sup>25</sup>, que aunque nacida como una organización Argentina, recopila información general sobre la situación latinoamericana. Del mismo modo, ha sido relevante la consulta de los recursos disponibles en el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)<sup>26</sup>, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile<sup>27</sup> y el Catastro de Conflictos en Chile<sup>28</sup>, dependiente de la Universidad de Chile y Universidad de Los Lagos, para encontrar informes y registros catastrales referentes a la conflictividad socioambiental.

También se han utilizado los recursos cartográficos existentes sobre conflictividad socioambiental que presentan información de forma gráfica, georreferenciada e, incluso, interactiva. Así, se ha recurrido al Environmental Justice

<sup>23</sup> "Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales". Puede consultarse en: <https://www.olca.cl>

<sup>24</sup> "Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina". Puede consultarse en <https://www.ocmal.org>

<sup>25</sup> "No a la Mina". Puede consultarse en: <https://noalamina.org/>

<sup>26</sup> "Centro de Documentación e Información Bolivia". Puede consultarse en: <https://www.cedib.org/>

<sup>27</sup> Instituto Nacional de Derechos Humanos, "Mapa de conflictos socioambientales en Chile 2012". Puede consultarse en: <https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/478>; Instituto Nacional de Derechos Humanos "Mapa de conflictos socioambientales en Chile 2015". Puede consultarse en: <https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/989>; Instituto Nacional de Derechos Humanos. "Mapa de conflictos socioambientales en Chile 2018". Puede consultarse en: <https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1166>

<sup>28</sup> Universidad de Los Lagos y Universidad de Chile, "Catastro de Conflictos en Chile". Puede consultarse en: [http://proyectoconflictos.ulagos.cl/?page\\_id=8215](http://proyectoconflictos.ulagos.cl/?page_id=8215)

Atlas que incorpora conflictos de diversa naturaleza ligadas al extractivismo,<sup>29</sup> al mapa de Conflictos Mineros en América Latina del OCMAL<sup>30</sup> y la cartografía de Amnistía Internacional Argentina denominada “Territorio Indígena”.<sup>31</sup>

Las cartografías digitales incluidas en esta investigación se han construido mediante la utilización de software de visualización interactiva de datos Tableau y Google Maps. A partir de los datos recopilados sobre los conflictos socioambientales existentes donde existían movilizaciones indígenas de resistencia civil, y su geolocalización mediante coordenadas, se preparó una base de datos con la información registrada y clasificada que sirvió para la generación de capas y la elaboración de los mapas. Esta base de datos también ha sido utilizada para la creación de las gráficas incluidas en el este artículo.

La investigación se delimitó temporalmente para incluir procesos de resistencia ocurridos desde 1990, momento en el que se aprecia una aceleración de la intensidad del modelo extractivista en América Latina, hasta 2020. Geográficamente, el mapeo se circunscribe a las zonas andinas y preandinas de Argentina, Bolivia y Chile. Esta delimitación no corresponde solamente a una cuestión geográfica, sino que estos espacios se deben comprender a partir del entramado de significados que se construyen desde narrativas históricas, políticas, culturales y étnicas autóctonas. Así, el área de estudio quedó finalmente delimitada tal como se muestra en la Figura 1, sumando alrededor de 2.100.000 km<sup>2</sup>. En Argentina se consideran las divisiones administrativas que limitan con la Cordillera de los Andes, aunque se acorta la superficie en la Provincia de Salta, asimismo, al estrecharse el territorio en la Patagonia Argentina se excluyen los conflictos en la zona costera del Atlántico. Por otro lado, en Bolivia se incluyen íntegramente las divisiones administrativas histórico culturalmente andinas, es decir, los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Por último, en el caso de Chile se registran los conflictos desde la depresión intermedia como accidente geográfico, hacia el interior de la Cordillera de Los Andes, excluyendo

---

<sup>29</sup> Leah Temper, et al., “Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas”. *Journal of Political Ecology* 22, no. 1 (2015): 255-278 “EJAtlas – Global atlas of Environmental Justice,” Environmental Justice Atlas. Puede consultarse en: <https://ejatlas.org/>

<sup>30</sup> “Base de datos sobre Conflictos Mineros en América Latina,” Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Puede consultarse en: [https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal\\_db-v2/](https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/)

<sup>31</sup> “Territorio Indígena,” Amnistía Internacional Argentina. Puede consultarse en: <https://territorioindigena.com.ar/>



las zonas costeras, pero ampliando el margen a las islas australes en la Patagonia Chilena como vestigios andinos.

**Figura 1. Delimitación del Área de Estudio**



Fuente: Elaboración propia.

A partir de la información recogida se han identificado 339 conflictos socioambientales para ser considerados, pero se ha realizado una selección en base a los objetivos de la investigación. Así, los conflictos que recoge este estudio cumplen las siguientes condiciones: Se han suscitado en relación con proyectos extractivistas, geográficamente se ubican en zonas andinas o preandinas, alguno de los actores protagonistas en los conflictos pertenece a comunidades indígenas, han desarrollado campañas de resistencia que utilizan principalmente métodos no violentos y el inicio de estas campañas se ha producido durante el periodo comprendido entre 1990 y 2020. En total se identificaron 129 campañas que cumplían las condiciones establecidas y se descartaron 210 que no cumplían todos los requisitos, aunque cabe mencionar que en un 62.53% de los 339 casos revisados se constata a comunidades indígenas involucradas. Es de destacar que, en el proceso de identificación de conflictos socioambientales en esta región, se han registrado 36 nuevos casos que no aparecían sistematizados en las cartografías y bases de datos disponibles, pero que sí aparecían en fuentes hemerográficas compartidas por las organizaciones ya descritas

y/o artículos científicos, y reunían los elementos necesarios para ser considerados por nuestra investigación, estos conflictos suponen un 27.91% del volumen total de casos identificados.

Seguidamente, la información registrada sobre los diferentes conflictos socioambientales se ha clasificado en diferentes categorías generales que responden a seis variables principales que se exponen a continuación:

*Tipo de actividad extractiva:* La actividad extractiva refiere a cualquier actividad de explotación de materias primas no renovables y renovables a gran escala. El tipo de actividad se clasifica en torno al rubro que se relaciona con la materia prima que se extrae y al que se oponen las campañas. La clasificación contempla seis categorías construidas a partir de la revisión documental: Agroganadería, extracción de hidrocarburos, forestal, generación de energía y servicios básicos, especialmente el agua; minería y piscicultura. En tres campañas se clasificaron tipos de actividad extractiva múltiples.

*Pueblo indígena participante:* Los pueblos indígenas corresponden a grupos que poseen identidades particulares basadas en la etnicidad indígena. La clasificación corresponde a los grupos indígenas existentes en Argentina, Bolivia y Chile<sup>32</sup>. Para cada campaña, se registraron todos los pueblos indígenas en resistencia no violenta, por lo cual, hay campañas que involucran a más de un pueblo indígena.

*Principales demandas de las comunidades indígenas:* Las principales demandas refieren a la exigencia central que realizan los actores indígenas que participan en las campañas. La clasificación se ha construido a partir de la información recabada y finalmente, se ha definido una demanda principal por campaña, por cumplir ambos o uno de los dos siguientes criterios: Ser la demanda más exigida por las voces de la resistencia y que se relaciona estrechamente con el o los objetivos de la campaña, o en su defecto, ser la demanda que logre englobar a las demás demandas.

---

<sup>32</sup> "Pueblos originarios," Instituto Nacional de Estadística y Censos República Argentina. Puede consultarse en: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-99>; Instituto Nacional de Estadística Bolivia, *Censo de población y vivienda 2012 Bolivia* (La Paz: INE, 2012) Puede consultarse en: [https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Caracteristicas\\_de\\_Poblacion\\_2012.pdf](https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Caracteristicas_de_Poblacion_2012.pdf); Instituto Nacional de Estadísticas Chile, *Síntesis de resultados CENSO 2017*. (Santiago: INE, 2018). Puede consultarse en: <https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf>

*Momento del inicio de las actividades de resistencia civil:* El momento de inicio de las campañas corresponde al momento en el cual los actores de las campañas han comenzado a movilizarse en relación con el estado de desarrollo del proyecto extractivista. La clasificación se ha construido con las categorías resistencia preventiva (anterior al inicio del proyecto), puesta en marcha (coincide con la implementación del proyecto sobre el terreno), daño consumado (corresponde al momento en el que el proyecto está en estadio de ejecución o ya ha finalizado) y sin información (al no haberse encontrado datos al respecto)<sup>33</sup>. Se ha asignado una única valoración por cada campaña.

*Métodos de resistencia empleados:* Los métodos de resistencia refieren a aquellas acciones no violentas que utilizan los actores a fin de ejercer presión a la contraparte y que contemplan desde actos simbólicos hasta oposición directa y la creación de instituciones alternativas. La clasificación se ha construido en base a los métodos de protesta y persuasión, no cooperación, intervención no violenta e intervención creativa constructiva<sup>34</sup>. Dado que los métodos utilizados en este tipo de campañas son múltiples y diversos, se han registrado específicamente todos los métodos que se han identificado por cada campaña.

*Impacto provocado por los procesos de resistencia:* El impacto indica los efectos que ha tenido la campaña de resistencia, especialmente se han estudiado dos factores: La intensidad que ha alcanzado la campaña a propósito de la capacidad de sumar adherentes, dar visibilidad a la campaña y utilizar métodos que ejerzan presión y, por otra parte, el éxito alcanzado por la campaña en base a la respuesta de la contraparte. La intensidad se ha calificado como baja (organización local), media (movilizaciones callejeras y visibles) y alta (movilizaciones masivas que pueden llegar a alcanzar la violencia y represión)<sup>35</sup>. El éxito se ha definido como el logro de los objetivos de la campaña, generalmente la anulación del proyecto; por otro lado, se ha definido el éxito parcial para el logro de algunas concesiones importantes, pero no los objetivos principales. Las campañas sin éxito incorporan campañas en las que no se han logrado

---

<sup>33</sup> Leandro Del Moral Ituarte et al., "Cartografiando el movimiento de justicia ambiental a escala regional: el mapa digital colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía". *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, no. 85 (2020): 1-35. <https://doi.org/10.21138/bage.2867>

<sup>34</sup> Sharp, *Politics of Nonviolent Action, Part Two: The Methods of Nonviolent Action*. Manchester; Maciej Bartkowski, "Alternative".

<sup>35</sup> "EJAtlas – Global atlas of Environmental Justice," Environmental Justice Atlas.

concesiones ni se han alcanzado los objetivos<sup>36</sup>. Se ha asignado una única valoración para cada campaña.

## RESULTADOS

Nuestra investigación ha identificado 129 conflictos socioambientales relacionados con actividades extractivas en las zonas andinas donde se producen procesos de resistencia civil desarrollados por comunidades indígenas. La distribución geográfica y densidad de estos conflictos se muestra en la Figura 2, que presenta un reparto desigual de los procesos identificados, con 64 (49.61%), casi la mitad, ubicados en regiones de Chile, mientras que las cifras para Bolivia y Argentina son menores, con 33 (25.58%) y 32 (24.81%) casos respectivamente.

**Figura 2. Densidad de Conflictos Socioambientales**



Fuente: Elaboración propia.

Analizando la distribución de los procesos de resistencia civil indígena ante conflictos alrededor de proyectos extractivistas en el territorio de cada uno de los países considerados, comprobamos cómo en el caso de Bolivia existe una alta concentración de ellos en dos de sus divisiones administrativas, los departamentos de La Paz (12) y Potosí (12), conteniendo el 72.73% del total de procesos de resistencia. En

<sup>36</sup> Maria Stephan et al., "Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict," *International security* 33, no.1 (2008): 7-44.

la Figura 2, se puede apreciar que en Bolivia, aunque las divisiones administrativas con mayor número de casos son La Paz y Potosí, la zona con mayor densidad de conflictos corresponde al área sureste de Oruro y noreste de Potosí. Los conflictos se concentran particularmente en torno a las principales fuentes hidrográficas de esta zona, debido a que han sido afectadas por la contaminación o desertificación. Especialmente, se alude al Lago Poopo, Río Desaguadero, Río Pilcomayo y Río Tarapaya.

Por el contrario, en Argentina existe una menor concentración a pesar de que la provincia de Jujuy (9) aglutina el 28.12% de los casos del país. En esta zona se ubica el hito tripartito que une Argentina, Bolivia y Chile y en parte, se encuentra dentro del triángulo del litio entre los tres países que incluye el Salar de Olaroz y parte de Salinas Grandes. Se destaca que la minería de litio es un rubro potencial y progresivamente conflictivo en este tipo de zona que particularmente se caracteriza por la presencia de otros recursos minerales a explotar y la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, aunque el mayor número de casos y densidad se presenta en la provincia de Jujuy, los conflictos en los que se han desarrollado procesos de resistencia civil se distribuyen más homogéneamente en el territorio argentino que en el boliviano y el chileno.

En Chile la concentración es incluso menor puesto que, aunque en la región de la Araucanía se concentra el mayor número de casos por división administrativa de los tres países, con 14 casos, su peso relativo en el conjunto del territorio es menor, con un 21.87%, dado el elevado volumen de procesos de resistencia identificados en este país. Asimismo, las zonas con mayor densidad se ubican dentro de la región de Arica y Parinacota y la zona entre la región de la Araucanía y región de Los Ríos. Dicha zona es de interés, porque forma parte del territorio ancestral *Wallmapu* habitado históricamente por los mapuche, quienes son símbolo de la resistencia frente al colonialismo español por casi 300 años en la “Guerra de la Araucanía” y que, tras la Independencia de Chile, han resistido tenazmente la invasión de latifundistas y transnacionales en el territorio. Esto ha cimentado lo que actualmente se conoce

como el “conflicto mapuche”, ante el cual el Estado ha respondido con la militarización permanente del territorio<sup>37</sup>.

#### ACTIVIDADES EXTRACTIVAS IMPLICADAS EN LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Los procesos de resistencia identificados se producen en conflictos socioambientales asociados a proyectos extractivistas. Nuestra investigación ha encontrado la presencia significativa de las siguientes actividades extractivas en estos conflictos: la minería, generación de energía y servicios básicos, extracción de hidrocarburos, piscicultura, agroganadería y forestal<sup>38</sup>. En la Tabla 1 se definen y describen dichas actividades extractivas.

**Tabla 1. Actividades Extractivas Incluidas en el Estudio**

Actividad	Descripción
Minería	Actividad basada especialmente en la extracción de oro, plata y cobre en el área de estudio, entre otros elementos. La minería a gran escala requiere de la utilización de grandes cantidades de agua y uso de sustancias tóxicas dañinas para los ecosistemas, con medidas de mitigación en muchos casos insuficientes. Se denuncia el peligro de prácticas como la lixiviación por su toxicidad o la minería a cielo abierto, que destruye la corteza terrestre.
Extracción de hidrocarburos	Actividad extractiva que busca extraer gas natural o petróleo mediante la excavación de pozos. La técnica de la fractura hidráulica es altamente cuestionada por los riesgos asociados a la filtración de fluidos tóxicos y contaminación en general, especialmente del agua.
Generación de energía y servicios básicos	Actividad que tiene por fin la generación de servicios básicos, especialmente electricidad, mediante proyectos hidroeléctricos o la geotermia. Los proyectos hidroeléctricos suponen la redirección de aguas, incluyendo inundación de zonas pobladas o patrimoniales; aquello afecta, además, la gestión del agua de las comunidades. Asimismo, la explotación de géiseres con el peligro de fugas de agua, vapor y calor también supone amenazas para zonas protegidas y patrimoniales.
Agroganadería	Actividad a gran escala que busca maximizar la producción de recursos renovables para consumo humano alimentario o para vestimenta, mediante cultivos industriales y/o explotación de animales domesticables. Aquello, sobrecarga la capacidad de producción “natural”. En el estudio se registran especialmente plantaciones a gran escala de caña de azúcar, soja, kinua, uva y trigo.
Piscicultura	Actividad basada en la crianza industrial de peces para consumo

<sup>37</sup> Miguel Leone, “Racionalidades securitarias sobre el pueblo mapuche. Un análisis comparativo de las políticas estatales en Chile y Argentina,” *Temas y Debates*, no. 40 (2020): 89–110. <https://doi.org/10.35305/tyd.v0i40.473>

<sup>38</sup> No se consideraron en el registro los conflictos socioambientales ocasionados por presencia de plantas procesadoras de sustancias tóxicas, contaminación por vertederos, proyectos de construcción inmobiliaria o carreteras, torres de alta tensión, aeropuertos u otros proyectos asociados a la privatización de terrenos indígenas.

Actividad	Descripción
	humano, aquello afecta la biodiversidad nativa y genera contaminantes. Especialmente, destaca la presencia de salmoneras en el área de estudio.
Forestal	Actividad que considera la plantación de monocultivos forestales para la obtención de madera y sus compuestos, como la celulosa. La introducción de especies foráneas modifica los ecosistemas y el consumo de agua que necesitan dichas plantaciones suele ser elevado.

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, entre el amplio abanico de proyectos de diverso tipo, tal y como aparece reflejado en la Tabla 2 y Figura 3, la mayoría de los conflictos socioambientales aparecen asociados a una única actividad extractiva, aunque existen 3 conflictos en los que confluyen varias actividades.<sup>39</sup>

**Tabla2. Actividades Extractivas en Conflictos Socioambientales con Procesos de Resistencia Civil Indígenas (1990-2020)**

Actividad / País	Argentina	Bolivia	Chile	Total
Minería	18	26	32	76
Extracción de hidrocarburos	8	5	-	13
Generación de energía y servicios básicos	3	2	23	28
Agroganadería	1	2	2	5
Piscicultura	1	-	9	10
Forestal	1	-	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>133</b>

Fuente: Elaboración propia.

Los datos recogidos nos muestran que la minería es la actividad extractiva que más se repite en los conflictos identificados a lo largo de las tres décadas que analiza este estudio, algo que está en sintonía con su larga tradición histórica en la región. Así, la minería se encuentra presente en 76 de los conflictos socioambientales estudiados, lo que supone su aparición en el 58.91% del total, siendo además la actividad extractiva más importante en cada uno de los tres países andinos de manera acusada. A continuación, en segundo lugar, pero de manera mucho menos destacada, aparece la generación de energía y servicios básicos, que está implicada en 28 conflictos, un volumen significativamente menor (21.71%) que el alcanzado por la minería. Esta actividad se distribuye de manera muy desigual por los países andinos,

<sup>39</sup> Esto explica que aunque el número de conflictos identificados sea de 129, la cantidad de actividades extractivas exceda ligeramente esas cifras hasta alcanzar el número de 133.

porque mientras que Chile concentra 23 conflictos con este componente, el 82.14% del total, son asociados generalmente al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, que es una actividad muy minoritaria en Argentina y Bolivia. La tercera actividad más significativa presente en los conflictos socioambientales en los que se desarrollan procesos de resistencia civil indígena es la extracción de hidrocarburos, con 13 casos (10.08%) distribuidos solamente en dos países: Argentina, con 8, y Bolivia, con 5. En ambos lugares, la explotación de los yacimientos petroleros ha situado esta actividad extractiva como la segunda más frecuente en los conflictos identificados en estos países.

Hay que destacar que en Chile también existe un alto nivel de conflictividad en torno a la piscicultura con 9 casos, acumulando el 90% del total de la región andina, los que sumados a los conflictos vinculados a proyectos hidroeléctricos, muestran que el uso y la gestión del agua es una problemática muy importante en el país. Por el contrario, encontramos que los conflictos en los que interviene la agroganadería son apenas testimoniales en las regiones andinas consideradas, con una presencia reducida a 5 casos, lo que representa tan solo un 3.88% del total, y menor aún es la presencia de la actividad extractiva forestal, que aparece únicamente en un conflicto situado en Argentina.

En la Figura 3 se muestra gráficamente la distribución geográfica de los conflictos socioambientales en los cuales existen comunidades indígenas que han desarrollado procesos de lucha no violentos para enfrentarlos, ilustrando las actividades extractivas implicadas en ellos. Así, se identifica una clara distribución de conflictos en torno a la minería en los tres países que se analizan. Estos conflictos se distribuyen en la parte norte de la cordillera de la zona de estudio, abarcando Argentina, Bolivia y Chile indistintamente. Por otra parte, resalta la concentración de conflictos en torno al rubro de generación de energía y servicios básicos en la macro zona sur de Chile, lo cual se encuentra estrechamente relacionado con proyectos de instalación de centrales hidroeléctricas.



**Figura 3. Distribución de Conflictos Según Tipo de Actividad Extractiva**



Fuente: Elaboración propia.

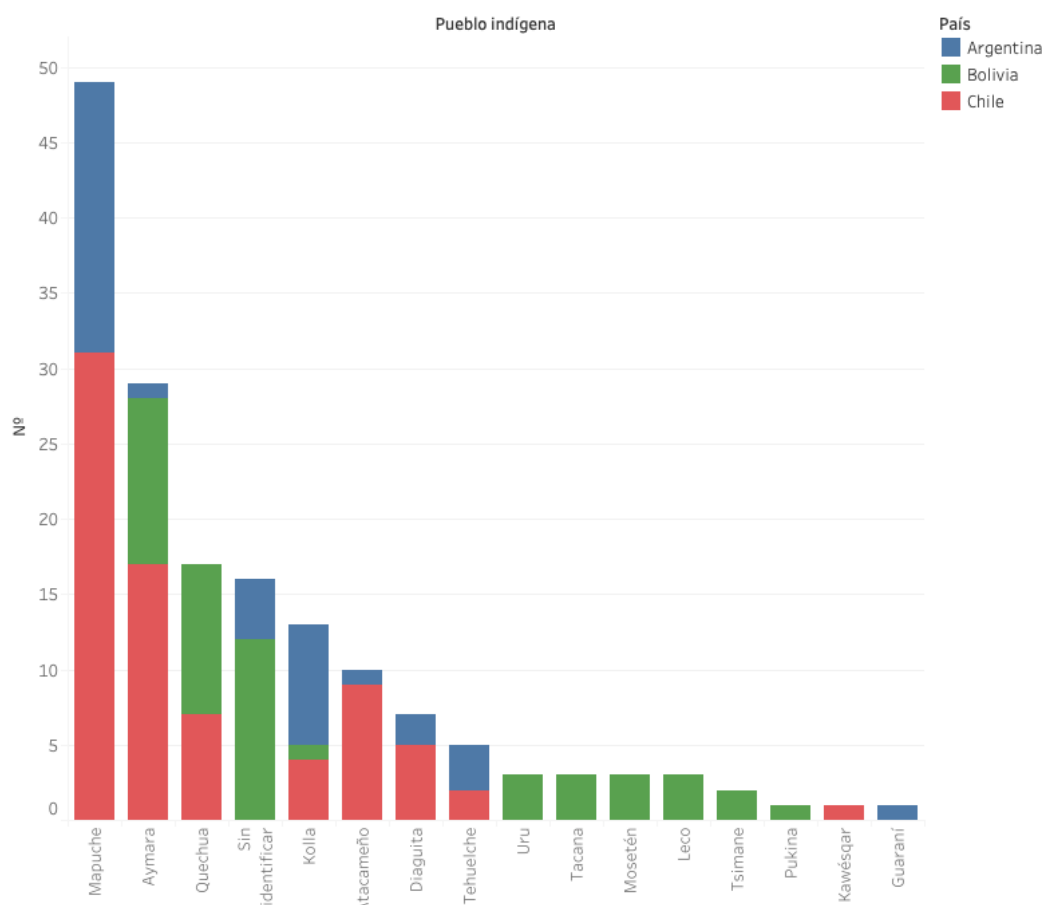
#### ACTORES INDÍGENAS INVOLUCRADOS

Los procesos de resistencia no violenta que se desarrollan en los conflictos socioambientales identificados son protagonizados por pueblos indígenas que se enfrentan a los proyectos extractivistas que se ejecutan sobre sus territorios. Las comunidades indígenas son los actores principales en dichos procesos, aunque suelen recibir apoyo desde diversas esferas de la sociedad civil.

En la Figura 4 se pueden apreciar los datos referentes a los pueblos indígenas participantes y los lugares desde los que han actuado<sup>40</sup>. Los resultados del análisis nos han permitido identificar 15 pueblos originarios cuyas comunidades aparecen como actores en los procesos de resistencia del conjunto de 129 conflictos socioambientales estudiados. Aunque en la mayor parte de los conflictos ha intervenido un único pueblo indígena, en 31 ocasiones (24.03%) han sido varios los pueblos que han participado simultáneamente en los procesos de resistencia, lo que explica que la cifra total de intervenciones sea de 163.

<sup>40</sup> Los casos sin información corresponden a casos en los cuales se hace alusión en las fuentes documentales a actores indígenas sin especificar el pueblo indígena al que pertenecen. El fenómeno ocurre especialmente en Bolivia, a propósito de la alta proporción de población indígena que dificulta la identificación de comunidades con identidades particulares a la del ciudadano boliviano.

**Figura 4. Pueblos Indígenas que han Utilizado la Resistencia Civil en Conflictos Socioambientales por País**



Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran que las comunidades mapuche son las más involucradas en los procesos de resistencia civil ante proyectos extractivistas en la región andina y preandina. Así, han participado en 49 ocasiones (30.06%), siendo el pueblo que más se ha movilizó en Argentina y Chile. El segundo pueblo indígena que más ha participado en estos procesos de resistencia ha sido el pueblo aymara, con 29 casos (17.79%), que ha sido el que más procesos ha protagonizado en Bolivia con 11 y el segundo más relevante en Chile con 17. También resulta significativa la participación del pueblo quechua en estos procesos de resistencia, hasta en 17 ocasiones (10.42%), siendo particularmente relevante en Bolivia donde se sitúa como el segundo actor indígena más importante. Un primer análisis de estos datos nos indica que la elevada participación de los pueblos mapuche, aymara y quechua en estos conflictos socioambientales, que alcanza el 58.27% de los casos, está muy por encima de la del

resto de pueblos originarios, lo que se corresponde de manera estrecha con el volumen de población indígena que representan<sup>41</sup>.

En la Figura 4 también se ilustra la frecuencia y la distribución por países de los procesos de resistencia protagonizados por los pueblos indígenas. Así, se aprecia cómo en Argentina las comunidades más involucradas en procesos de resistencia noviolenta frente a proyectos extractivos pertenecen a los pueblos mapuche (18) y kolla (8), seguidos de tehuelches (patagones) con 3 casos. Por otro lado, en el caso boliviano destacan aymaras (11) y quechuas (10), mientras que lecos, tacanas y urus están presentes en tres conflictos cada uno. Finalmente, en Chile los pueblos indígenas que con mayor frecuencia resisten a proyectos extractivistas utilizando la resistencia civil son el mapuche y el aymara, con 31 y 17 casos respectivamente, a los que sigue el pueblo atacameño con 9. Excepcionalmente en Bolivia se evidencia la existencia de pueblos en aislamiento voluntario o no contactados en la zona preandina correspondiente al Amazonas, de los cuales su integridad se pone en peligro a propósito de proyectos invasores en los territorios como los proyectos hidroeléctricos El Bala-Chepete, que contemplan áreas de inundación donde se presume la presencia de indígenas. Estos casos no se han contabilizado como actores de las campañas.

A continuación, se detallan las organizaciones indígenas y civiles que han participado en los procesos de resistencia noviolenta frente a los proyectos extractivistas. En Argentina, como organizaciones indígenas destacan las comunidades mapuche organizadas histórica y tradicionalmente como lof<sup>42</sup>, que en algunos casos cuentan incluso con personalidad jurídica. También ha sido relevante la Red Puna que abarca organizaciones de productores, productoras, campesinos y campesinas indígenas del noreste argentino, así como la Pastoral Aborígen, institución eclesiástica que ha estado muy activa en todo el territorio. Además, desde otras

---

<sup>41</sup> Según el último censo de 2012 en Bolivia, de una población de 2.806.592 indígenas (27.89% del total), los grupos más preponderantes son el pueblo indígena quechua (1.281.116), aymara (1.191.352) y chiquitano (87.885). Puede consultarse en: <https://ibce.org.bo/images/publicaciones/Resultados-Censo-2012.pdf>

En el caso de Chile el último censo fue el 2017, se registra un total de 2.089.803 indígenas (11.89% del total). Los grupos mayoritarios son el pueblo indígena mapuche (1.745.147), aymara (156.764) y diaguita (88.474). Puede consultarse en <https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf>

El último censo argentino de 2010 registra una población indígena de 955.032 personas (2.38% del total). Los grupos mayoritarios son mapuche (205.009), toba (126.967) y guaraní (105.907). Puede consultarse en <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Nivel4-CensoNacional-3-999-Censo-2010>

<sup>42</sup> Clanes familiares con una autoridad central.

organizaciones sociales no indígenas, las Asambleas de Vecinos Autoconvocados y la Unión de Asambleas Ciudadanas también han actuado en estos procesos en distintas zonas del país.

En Bolivia, entre las organizaciones indígenas que más se han movilizadas se encuentran el Consejo Regional Tsimané Mosekene, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, la Organización del Pueblo Indígena Moseken, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, la Comisión Indígena Trinacional del Pilcomayo, la Organización de Capitanes Weenhayek y Tapietés, el Consejo Indígena del Pueblo Tacana y la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí. También destacan otras organizaciones no necesariamente indígenas como la Central Nacional de Trabajadores de El Alto, la Federación de Consejos Vecinales El Alto y la Coordinadora de Defensa de los Ríos Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopo.

Finalmente, en Chile también tienen una actividad importante las propias comunidades mapuche organizadas en lof, así como la organización de los Huascoaltinos, el Consejo de Pueblos Aymaras y Atacameños, el Consejo Nacional Aymara Mallkus y Tallas, la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota, la Alianza Territorial Mapuche, el Parlamento de Koz Koz, así como otras organizaciones de la sociedad civil como las Juntas de Vecinos y el Observatorio Ciudadano.

#### DEMANDAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

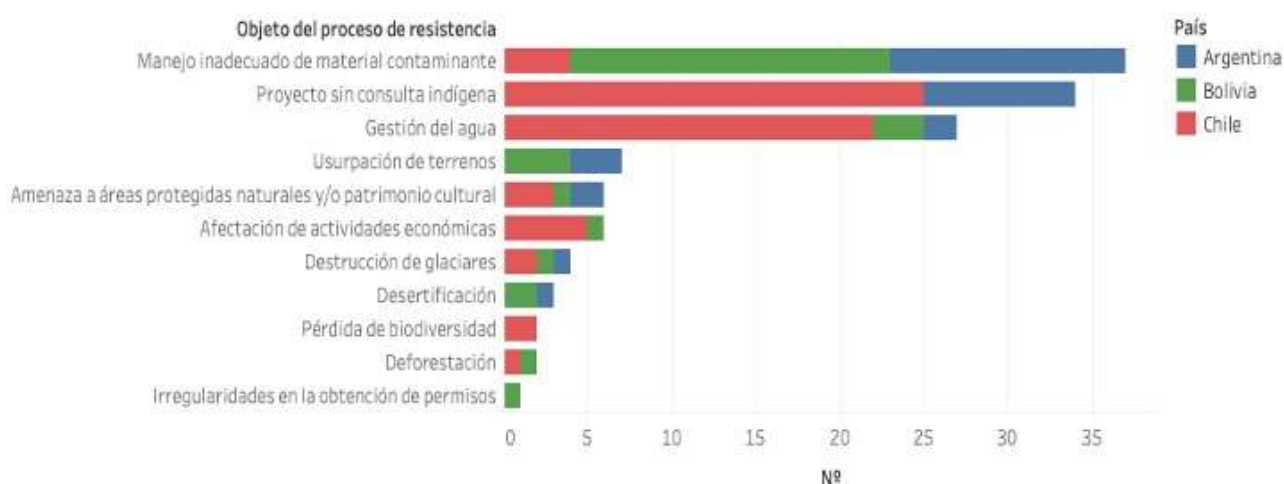
Los resultados de nuestra investigación muestran que las principales demandas que están presentes en las luchas de las comunidades indígenas frente a proyectos extractivistas, en el sur de la región andina, tal y como aparecen en la Figura 5, están relacionadas con una mejora de la gestión de materiales contaminantes generados por la acción de los proyectos extractivistas, lo que representa el 28.68% con 37 casos. Aquellos casos incluyen la contaminación inminente o consumada producto de las actividades extractivas y no solo se denuncia la contaminación del agua sino también atmosférica y del suelo. Esta categoría también incorpora la contaminación a propósito de pasivos ambientales de proyectos

temporalmente previos a las campañas de resistencia noviolenta, por ejemplo, antiguos depósitos de residuos mineros.

En segundo lugar, aparece la oposición a proyectos que no han respetado el derecho a la consulta previa que garantiza el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 2014. Así, la demanda de respeto a la consulta previa está presente en 34 conflictos, lo que supone una cuarta parte del total (26.35%). Esto muestra que las comunidades son conscientes de su derecho colectivo a la consulta previa cuando un proyecto puede afectarles negativamente en sus derechos colectivos, lo que debe ser garantizado por los Estados, hacia quienes dirigen sus demandas.

A continuación, los datos analizados nos muestran que la preocupación que aparece en tercer lugar de relevancia en estos conflictos tiene que ver con el agua, ya sea con el acceso a ella, su escasez o su gestión. Los conflictos con demandas sobre ella alcanzan la cifra de 27, suponiendo el 20,93% del volumen total. Esto brinda principal relevancia al agua ya que no solo se considera como elemento susceptible de contaminación, sino que la misma gestión de ella puede afectar directamente a las comunidades en la disponibilidad producto de desvíos o usos para fines extractivistas, propiciando la escasez.

**Figura 5. Tema de los Conflictos Socioambientales por País**



Fuente: Elaboración propia.

No podemos dejar de señalar que solo uno de los conflictos centra sus demandas en la reparación de las irregularidades en la obtención de permisos por

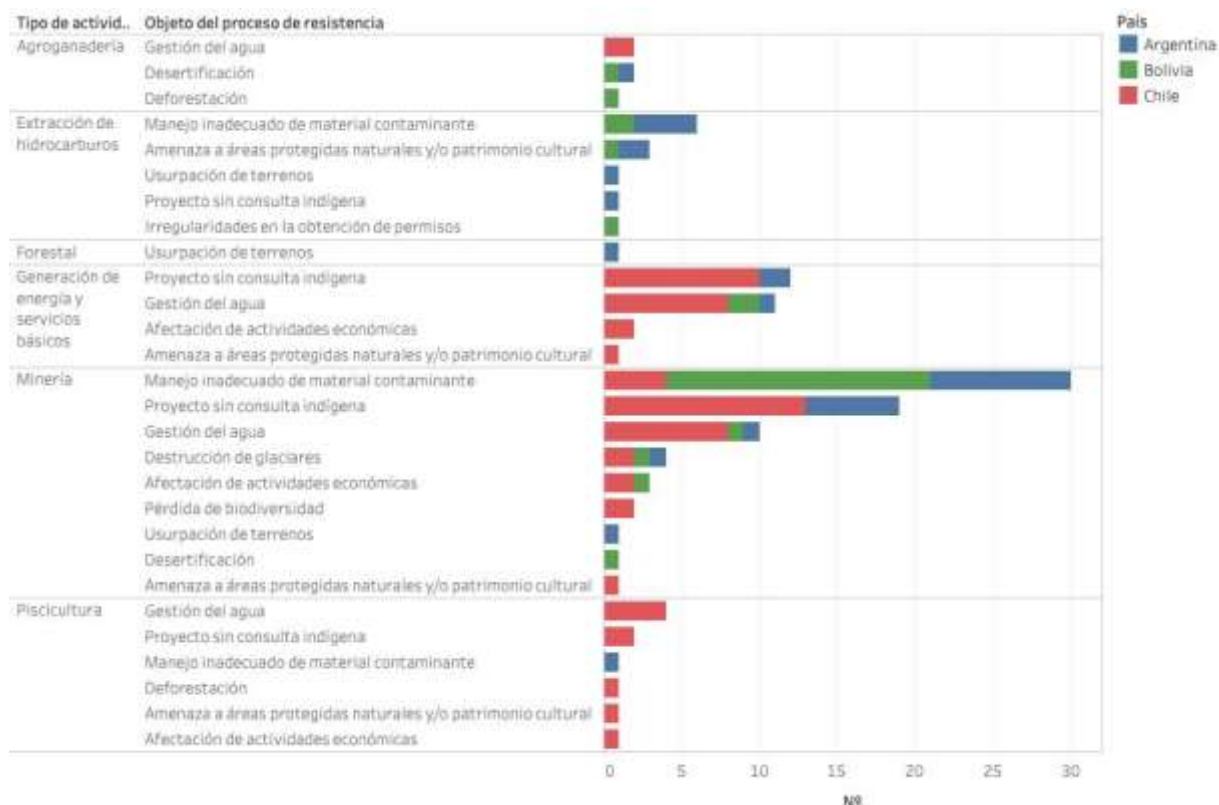
parte de las empresas ejecutoras de los proyectos. Del mismo modo, solamente en 2 casos se reclama por la deforestación y pérdida de biodiversidad. Lo anterior no significa que aquellos aspectos no sean relevantes para otras campañas de resistencia civil, sin embargo, no logran configurarse como la demanda principal.

En la Figura 5 también se aprecia la desigual presencia de las demandas en los conflictos de los tres países andinos estudiados. Así, la exigencia de mejora de la gestión de materiales contaminantes es mayor en Bolivia, que se reivindica hasta en 19 ocasiones, seguido por Argentina en 14 casos y Chile con 4 casos. En este último país, los conflictos se centran especialmente en la exigencia de respeto al derecho de consulta indígena junto con Argentina, con 25 y 9 casos respectivamente, mientras que en Bolivia no existe ningún caso que presente reivindicaciones en torno a esta cuestión. Asimismo, la gestión del agua es un tema relevante para las demandas en Chile con 22 casos, lo cual disminuye significativamente en Bolivia con 3 casos y en Argentina con 2.

Por otro lado, resulta de interés ampliar el análisis no solo al país de referencia, sino también a la actividad extractiva que ha generado el conflicto socioambiental. En la Figura 6 se agrupan los objetos del proceso de resistencia en función del tipo de actividad extractiva, a la par del detalle por país. En efecto, en la agroganadería las principales demandas de las comunidades se configuran en torno a la gestión del agua con 2 casos (40%) que se concentran en Chile y a contrarrestar los efectos de desertificación con un caso tanto en Argentina como en Bolivia, representando un 40% del total para esta actividad. En la extracción de hidrocarburos destaca el manejo inadecuado de material contaminante tanto en Argentina como en Bolivia en 6 casos en total (50%). En el único caso del rubro forestal, las demandas se concentran en torno a la usurpación de terrenos indígenas en Argentina. Por otra parte, en relación con la generación de energía y servicios básicos, las comunidades reclaman y exigen principalmente el cumplimiento de la consulta indígena, tanto en Chile como en Argentina con 12 casos en total (46.15%), en Bolivia el tema se centra especialmente en la gestión del agua en dos oportunidades (7.69%). Asimismo, en la minería, el tema del conflicto con mayor frecuencia se enmarca en el manejo inadecuado de material contaminante en 30 casos (42.25%), siendo preponderante en

Argentina y Bolivia, ya que en Chile siguen destacando las demandas de consulta indígena en 13 campañas (18.30%). Por último, en el rubro de la piscicultura, el tema del conflicto se centra en la gestión del agua en 4 casos (40%) concentrados en Chile, aunque el único caso argentino se centra en el manejo inadecuado de material contaminante (10%).

**Figura 6. Objetos de Procesos de Resistencia a Asociados a Actividad Extractiva por País**



Fuente: Elaboración propia.

## MÉTODOS DE ACCIÓN NOVIOLENTA EMPLEADOS Y ALCANCE DE LA RESISTENCIA CIVIL

Las campañas indígenas de resistencia civil identificadas han empleado hasta 387 acciones para oponerse a los proyectos extractivistas en los conflictos socioambientales en las que estaban inmersas sus comunidades. Aunque los métodos empleados en esos procesos de lucha no violenta han sido variados, como muestra la Tabla 3, son muy mayoritarios los métodos no violentos que se pueden catalogar como de protesta y persuasión, que suponen el 80.36% del total, con 311 acciones. Por el contrario, las tácticas de intervención no violenta son más minoritarias con 63 acciones, un 16.28% del total. La presencia de las iniciativas de no cooperación

aparecen solamente de manera testimonial en 6 ocasiones, representando un residual 1.55% del conjunto de acciones de resistencia civil.

**Tabla 3. Métodos de Acción Noviolenta Empleados**

Categoría	Acción	Argentina	Bolivia	Chile	Total
Métodos de protesta y persuasión (311)	Cartas de oposición o de apoyo	5	2	11	18
	Declaraciones públicas	32	27	61	120
	Recogida de firmas	2	-	2	4
	Peticiones	1	8	-	9
	Slogans	-	-	2	2
	Despliegue de banderas	1	-	3	4
	Octavilla/Panfletos	1	-	1	2
	Campañas mediáticas	8	5	5	18
	Radio	1	1	2	4
	Grupos de presión a los parlamentarios	1	-	1	2
	Actos públicos simbólicos	1	-	2	3
	Pinturas de protesta	2	-	3	5
	Abrumar a funcionarios	-	1	1	2
	Vigilias	1	2	-	3
	Acciones artísticas	5	-	2	7
	Marchas	11	11	22	44
	Desfiles	-	-	1	1
	Funerales simbólicos	-	-	1	1
	Asambleas	6	6	8	20
	Reuniones de protesta	9	5	23	37
Foros de información	1	-	4	5	
Métodos de no cooperación (6)	Boicot social	-	3	-	3
	Huelgas	1	1	-	2
	Boicot de iniciativas gubernamentales	-	-	1	1
Métodos de intervención (63)	Huelga de hambre	1	-	-	1
	Obstrucción noviolenta	13	18	17	48
	Ocupación noviolenta	4	5	2	11
	Instituciones sociales alternativas	2	-	1	3
	Sin clasificar	1	5	1	7
<b>TOTAL</b>		<b>111</b>	<b>99</b>	<b>177</b>	<b>387</b>

Fuente: Elaboración propia.

Todas las campañas de resistencia han recurrido al uso de metodologías de protesta y persuasión, desplegando una gran variedad de actos simbólicos e intentando influir en las autoridades, en la opinión pública en general o en los actores impulsores de los proyectos. Estas acciones a veces no han ido más allá de la simple expresión verbal o escrita, como las declaraciones formales colectivas de oposición, que se han encontrado en 120 de los 129 conflictos socioambientales analizados,



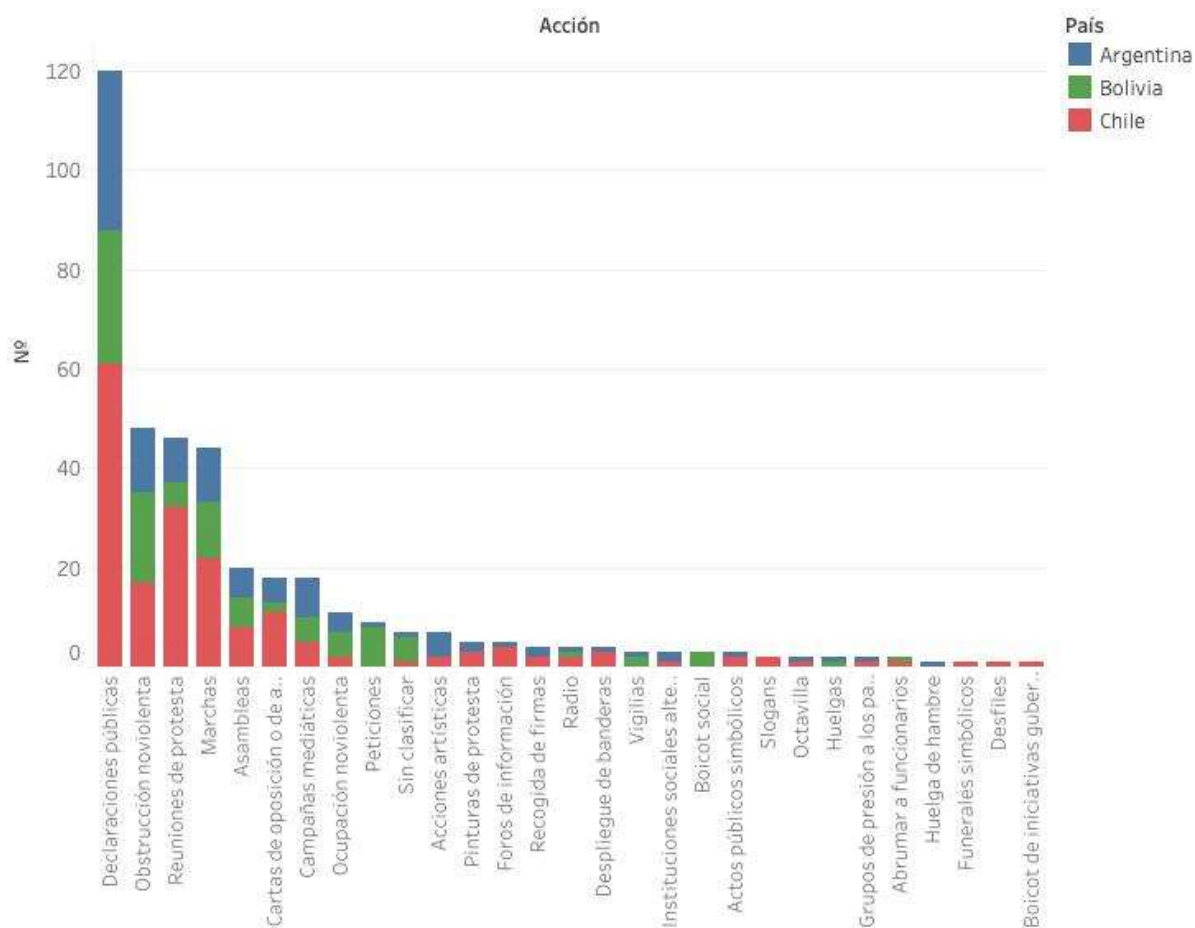
siendo la acción a la que más se ha recurrido en los procesos de resistencia, tal y como aparece reflejado en la Figura 7, o como el envío de cartas de protesta, utilizadas en 18 casos. Entre los métodos más utilizados de este tipo destacan también las marchas a sitios significativos, en 44 ocasiones, y las reuniones de protesta (concentraciones y mítines), en 37, así como las asambleas públicas que fueron utilizadas en 20 ocasiones. Además, es interesante señalar cómo en 18 procesos se ha recurrido a los medios de comunicación para compartir mensajes informativos con un público más amplio y aumentar la incidencia de las campañas de protesta, algo que se ha hecho también en 4 casos más que han utilizado específicamente la radio para ello. Resulta destacable cómo los procesos de resistencia han empleado un amplio abanico de tácticas de protesta y persuasión, evidenciando una gran creatividad en sus formas de lucha, incluyendo desde métodos simbólicos, como un funeral y 5 acciones artísticas, hasta otros más confrontacionales, como los 2 grupos de presión a parlamentarios o las 3 acciones desarrolladas para abrumar a funcionarios.

El aumento de intensidad en los conflictos ha estimulado los procesos de resistencia, escalando los métodos de lucha y acudiendo a la realización de 63 acciones de intervención no violenta. Estas acciones directas tratan de provocar situaciones que alteren el conflicto de manera inmediata y, en el caso de las campañas analizadas, han sido principalmente dirigidas a la interrupción de patrones de comportamiento tomando la forma de obstrucciones no violentas en 48 casos, con el bloqueo de caminos, los cortes de suministros hacia los proyectos o la interposición física de grupos de activistas para evitar que se puedan continuar las actividades extractivistas. También se ha llevado a cabo la ocupación física de espacios en 11 ocasiones e, incluso, en uno de los procesos, se realizó una huelga de hambre. Además, en 3 conflictos socioambientales, las comunidades indígenas decidieron realizar las consultas que les negaba el Estado por sus propios medios, en un intento de desarrollar sus propias instituciones alternativas.

Por último, la presencia de iniciativas de no cooperación no es significativa, aunque tres comunidades bolivianas aplicaron el boicot social en sus luchas y la huelga se utilizó en una ocasión en Argentina y otra en Bolivia como mecanismo de

protesta. En Chile la no cooperación se utilizó una vez en modo de boicot de iniciativas gubernamentales.

**Figura 7. Métodos Utilizados por las Comunidades en Resistencia por País**



Fuente: Elaboración propia.

Los hallazgos del estudio también muestran que un amplio número de los procesos de resistencia analizados en los conflictos socioambientales andinos emplean la vía institucional/legal como mecanismo complementario de lucha. Así, el 61% de los casos acompañan la lucha noviolenta con la presentación formal de objeciones a las evaluaciones de impacto ambiental con apoyo de entidades técnico-científicas, la interposición de demandas, especialmente por incumplimiento de la consulta indígena de acuerdo con el Convenio OIT 169, o recurren a instancias del sistema interregional de protección como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a la intensidad que han alcanzado las campañas de resistencia civil indígena, tal y como se expone en la Tabla 4, podemos decir que la mayoría de ellas presentan una intensidad baja, con 52 casos (40.31%), o media, con 49 casos (37.97%).

Son menos frecuentes las campañas de intensidad alta, presentándose solamente en 28 ocasiones (21.70%). En la distribución por país es posible apreciar que la intensidad de las campañas es más elevada en Bolivia que en Chile. Así, en Bolivia el 33.33% de las campañas de resistencia civil que se desarrollan son de intensidad alta mientras que la incidencia de las mismas baja a la mitad en Chile alcanzando solamente el 15.62% del total en el país.

Es interesante destacar aquí como se produce una relación directa entre el tipo de acciones empleadas en los procesos de resistencia y la intensidad de los conflictos. Por ejemplo, en el caso boliviano, que cuenta con una mayor presencia de campañas de intensidad alta, se recurre más al empleo de métodos de intervención no violenta. Así, de las 99 acciones identificadas en los procesos de resistencia civil indígena desarrollados en ese país, 23 (23.23%) se podían catalogar como tales métodos. Mientras, en el caso chileno, de las 177 acciones identificadas, solamente 20 (11.30%) encajaban en esta categoría. El mayor empleo de este tipo de tácticas en Bolivia, más del doble que en Chile, se corresponde directamente con la mayor intensidad de los procesos de resistencia civil que se han producido en ese país.

**Tabla 4. Intensidad Alcanzada por las Campañas de Resistencia Civil**

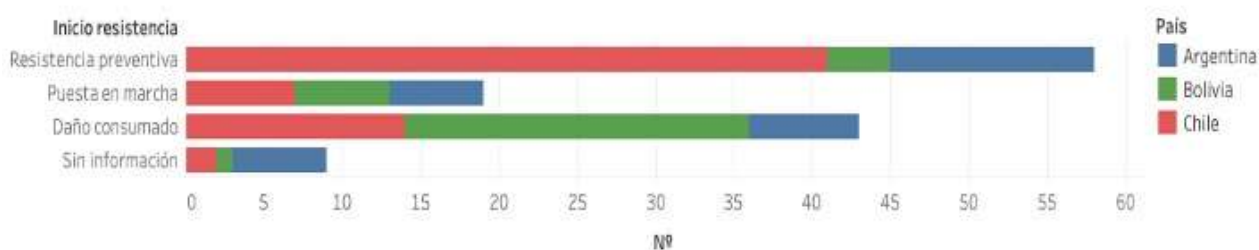
<b>Intensidad</b>	<b>Argentina</b>	<b>Bolivia</b>	<b>Chile</b>	<b>Total</b>
Alta	7	11	10	28
Media	13	14	22	49
Baja	12	8	32	52
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>129</b>

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, nuestra investigación también ha tratado de documentar el momento del inicio de las campañas de resistencia civil en relación con el desarrollo de los proyectos extractivistas. Así, tal y como se aprecia en la Figura 8, la mayoría de los procesos de lucha no violenta han comenzado antes de que empezase la ejecución del proyecto sobre el terreno, constituyéndose en una resistencia preventiva que alcanzó la cifra de 58 casos, alcanzando el 44.96% de los conflictos analizados. En segundo lugar, la lucha se inició una vez que ya se habían materializado los daños en 43 ocasiones (33.33%). Finalmente, 19 procesos comenzaron a la vez que la ejecución del proyecto extractivista (14.73%).

Resulta pertinente señalar que mientras que en Argentina y Chile la resistencia se manifiesta mayoritariamente de forma preventiva, en 13 y 41 casos respectivamente, el escenario que se presenta en Bolivia es diferente. Los datos muestran que allí la resistencia civil comienza más tardíamente, una vez que el proyecto extractivista se había desarrollado y los daños ya se habían consumado, hasta en 22 ocasiones, para un 66.66% de conjunto de conflictos bolivianos. Esto está relacionado con la mayor tradición histórica del fenómeno extractivista en ese país, lo que ha provocado un deterioro socioambiental que se ha acumulado con el paso de los años.

**Figura 8. Momento de Inicio de la Resistencia Civil por País**



Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de los efectos de los procesos de resistencia civil indígenas implicados en conflictos socioambientales por proyectos extractivistas no son concluyentes. La información disponible parece señalar que la probabilidad de éxito de estas movilizaciones es mayor que la de fracaso tal y como se muestra en la Tabla 5. Así, los casos en los que los procesos lograron totalmente los objetivos planteados fueron 26 (20.15%) y, al menos 15 (11.63%) alcanzaron parcialmente esos objetivos. En cambio, solo se han encontrado 12 (9.30%) conflictos en los que estos procesos terminaron fracasando. Sin embargo, estos datos hay que considerarlos insuficientes para alcanzar una conclusión definitiva al respecto, dado que no se tiene información suficiente para valorar los resultados de 76 conflictos, lo que supone el 58.91% del conjunto. En efecto, en 53 casos se obtuvo conclusiones (41,08%), sin embargo, de los

casos restantes, en 40 de ellos (31%) a pesar de que no hay información respecto del alcance de la campaña, hay indicios de que los casos siguen activos y en 36 casos (27.90%) no se ha encontrado información de seguimiento.

**Tabla 5. Resultados de los Procesos de Resistencia Civil**

Categoría / País	Argentina	Bolivia	Chile	Total
Alcanzan los objetivos	8	2	16	26
Alcanzan los objetivos parcialmente	6	3	6	15
No alcanzan los objetivos	7	1	4	12
Sin información	11	27	38	76
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>64</b>	<b>129</b>

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de los resultados y la probabilidad de éxito y de fracaso de los procesos de resistencia civil varía significativamente en los tres países analizados. Así, la frecuencia de los casos que no alcanzan los objetivos en Argentina es 7 y la probabilidad de fracaso alcanza a un 21.87% del conjunto de conflictos socioambientales analizados en el país. Por su parte, en Chile la frecuencia es de 4 casos y la probabilidad de fracaso se sitúa en el 6.25%, mientras que en Bolivia aparece solo un caso que representa únicamente el 3.03% del total, aunque el volumen de casos con información disponible para este país es muy reducido. Por el contrario, la probabilidad de éxito total es mayor, aunque también presenta variaciones significativas. Tanto Argentina como Chile tienen una probabilidad de éxito del 25%, con una frecuencia de 8 y 16 casos respectivamente, pero esa probabilidad se reduce al 6.06% en Bolivia. Los datos indican, por tanto, que los procesos de resistencia civil tienen una mayor probabilidad de alcanzar los objetivos que se plantean que de fracasar, una tendencia que incluso se acrecentaría si se agregan los resultados que muestran la frecuencia de casos que también alcanzan objetivos, aunque de manera parcial.

La Figura 9 presenta la distribución espacial y densidad de los procesos de resistencia civil que han alcanzado sus objetivos total y parcialmente. La mayor densidad de conflictos socioambientales en los cuales se ha utilizado la resistencia civil está en dos zonas marcadas en el mapa: Una en Chile en el área circundante a San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta y otra al sur de Chile y Argentina, entre la región de la Araucanía y la región de Los Ríos en el lado chileno, y entre

Neuquén y Río Negro en Argentina, donde se concentra la mitad de los casos de éxito del país con 7 de 14 casos, situación similar en Chile con 10 de 22 casos.

**Figura 9. Densidad de Casos Exitosos de Resistencia Civil**



Fuente: Elaboración propia.

## CONCLUSIONES

La investigación realizada sobre los procesos de resistencia civil indígenas acontecidos ante proyectos extractivistas en la zona sur de los Andes durante el periodo 1990-2020 nos ha permitido identificar 129 conflictos donde se han llevado a cabo estas dinámicas de lucha, encontrando 36 nuevos casos de conflictos socioambientales que no estaban sistematizados en las cartografías y bases de datos disponibles. La distribución de esos procesos de resistencia sobre el territorio no es homogénea, acumulándose casi la mitad de ellos en las regiones chilenas.

En primer lugar, la actividad extractiva que aparece como principal desencadenante de las movilizaciones no violentas ha sido la minería, con presencia en el 58.91% de los casos, siendo además la más relevante en cada uno de los territorios de los tres países que abarca este estudio, lo que parece encajar con la larga tradición minera de la región andina. Por el contrario, tanto la generación de energía y servicios básicos como la extracción de hidrocarburos, que son otras dos actividades

significativas en los conflictos socioambientales analizados, suman a su menor frecuencia una distribución más desigual sobre el territorio andino, concentrándose las primeras en Chile y las segundas en Argentina y Bolivia.

En segundo lugar, nuestro mapeo ha identificado a comunidades de 15 pueblos indígenas como actores participantes en los procesos de resistencia civil analizados. Las comunidades que han aparecido con mayor frecuencia son las mapuche, seguidas de las aymara y quechua, cuya presencia alcanza de manera conjunta el 58.27% de los conflictos. Este protagonismo parece corresponder con la proporción mayoritaria de los tres pueblos en los territorios andinos analizados, donde sus comunidades son las más importantes, y no indica una predisposición de estos pueblos a la participación en los procesos de lucha no violenta en el marco de conflictos socioambientales.

En tercer lugar, el análisis de las luchas de las comunidades indígenas frente a proyectos extractivistas muestra que han centrado sus demandas principalmente en torno a la mejora de la gestión de materiales contaminantes generados por la acción de los proyectos extractivistas, en un 28.68% de las ocasiones, y a su participación en los procesos de toma de decisiones y el respeto del derecho a la consulta previa, en un 26.35% de los casos. Nuestro estudio señala una desigual distribución de las demandas en los tres países andinos, con una mayor preocupación por la gestión de materiales contaminantes en Bolivia, mientras que en Argentina se centra la atención en el respeto al derecho de consulta indígena. En el caso de Chile, destaca también la problemática de la gestión del agua.

En cuarto lugar, hay que destacar que estas campañas indígenas de resistencia han utilizado una gran variedad de métodos no violentos en sus luchas. Así, se ha recurrido principalmente al empleo de acciones de protesta y persuasión, mostrando una gran diversidad de métodos con gran creatividad, pero también se han desarrollado tácticas de intervención no violenta, aunque de manera menos frecuente. Sin embargo, la puesta en marcha de iniciativas de no cooperación ha sido más escasa. Resulta significativo comprobar cómo parece existir una relación directa entre el tipo de acciones empleadas en los procesos de resistencia y la intensidad de los conflictos, recurriéndose a los métodos de intervención no violenta cuando la intensidad era alta y empleando métodos de protesta y persuasión cuando era baja, esta conclusión se ha

obtenido entrecruzando la información de la frecuencia del tipo métodos empleados, los cuales se reconocen por sus distintos niveles de intensidad y por otra parte, la intensidad registrada del conflicto en base a la participación, visibilidad de la campaña y capacidad de generar presión.

El análisis de la información recogida acerca de los efectos de los procesos de resistencia civil indígenas implicados en conflictos socioambientales por proyectos extractivistas no nos permite alcanzar unas conclusiones definitivas al respecto dada la escasez de información en la mayoría de los casos identificados. Los datos disponibles indican una tendencia hacia la mayor probabilidad de éxito, total o parcial, de estas campañas frente a su probabilidad de fracaso. Sin embargo, es necesario llevar a cabo nuevas investigaciones al respecto que confirmen o refuten estos resultados preliminares, incluyendo estudios de caso y trabajo de campo.

En efecto, debemos entender estos procesos de lucha no violenta como una respuesta de poblaciones andinas frente a las violencias generadas por los proyectos extractivistas, ya que estas campañas a escala local son ejemplos de las resistencias que enfrentan las iniciativas que, desde el Norte Global, reproducen las relaciones de dominación, explotación y conflicto, y responden a la colonialidad del poder que se mantiene muy presente en América Latina. Por ello, la documentación de los conflictos socioambientales y campañas de resistencia civil, podemos considerarla como una táctica de resistencia que busca romper la barrera de desinformación de gobiernos y privados, pues, en ningún caso la información de este estudio ha provenido de fuentes estatales. Sin embargo, si la documentación es un desafío, lo es aún más el seguimiento de los conflictos y campañas que se suscitan, ya que ello requiere de colaboración activa, sistemática y a largo plazo para mantener información actualizada en circulación.

Finalmente, cabe mencionar que las comunidades indígenas son un grupo históricamente oprimido, por tanto, la resistencia frente al extractivismo no es solo defensa territorial, sino que supone a la par, una lucha por la identidad, el reconocimiento y la existencia. El racismo ambiental se hace presente en América Latina y en este estudio queda en evidencia cómo en los 339 casos revisados inicialmente, en un 62.53% había comunidades indígenas involucradas, afectando sus



territorios y formas de organización social, económica y cultural. Por ello, la relevancia de visibilizar y estudiar métodos no violentos de resistencia de comunidades indígenas, ya que los reducidos métodos violentos utilizados han respaldado aquellos discursos que justifican la militarización de sus territorios por parte de los Estados, haciendo caso omiso a la legitimidad de las luchas en un escenario de crisis ambiental global.

## REFERENCIAS

Acosta, Alberto. "The buen vivir: An opportunity to imagine another world". En *Inside a champion: An analysis of the Brazilian development model*, editado por Dawid Danilo Bartelt, 192-210. Río de Janeiro: The Heinrich Boll Foundation, 2012. Recuperado de: [https://www.boell.de/sites/default/files/Inside\\_A\\_Champion\\_Democracy.pdf#page=194](https://www.boell.de/sites/default/files/Inside_A_Champion_Democracy.pdf#page=194)

Amnistía Internacional Argentina. "Territorio Indígena". Puede consultarse en: <https://territorioindigena.com.ar/>

Bartkowski, Maciej. "Alternative Institution-Building as Civil Resistance". *Mind of the movement*, 13 de junio, 2018. Recuperado de: [https://www.nonviolent-conflict.org/blog\\_post/alternative-institution-building-civil-resistance/](https://www.nonviolent-conflict.org/blog_post/alternative-institution-building-civil-resistance/)

Bebbington, Anthony. "Elementos Para Una Ecología Política de Los Movimientos Sociales y El Desarrollo Territorial En Zonas Mineras." En *Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas. Una Ecología Política de Transformaciones Territoriales*, editado por Anthony Bebbington, 23-46. Lima: IEP: CEPES, 2007.

Bullard, Robert. "Anatomy of environmental racism and the environmental justice movement". En *Confronting environmental racism: Voices from the grassroots*, editado por Robert Bullard, 15-39. Boston: South End Press, 1993.

"Centro de Documentación e Información Bolivia". Puede consultarse en: <https://www.cedib.org/>

Dávalos, Pablo. "Movimientos indígenas en América Latina: El derecho a la palabra". En *Pueblos indígenas, Estado y democracia*, editado por Pablo Dávalos, 17-33. Buenos Aires: CLACSO, 2005. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101026124338/2Davalos.pdf>

De Sousa Santos, Boaventura, "Introducción: las epistemologías del Sur". En *Formas-Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer*, editado por CIDOB, 9-22. Barcelona: CIDOB, 2011.

De Sousa Santos, Boaventura. *Justicia Entre Saberes: Epistemologías Del Sur Contra El Epistemicidio*. Madrid: Ediciones Morata, 2017.

del Moral Ituarte, Leandro; Laconi, Cesare, y Pedregal, Belén. “Cartografiando el movimiento de justicia ambiental a escala regional: el mapa digital colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía”. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, no. 85 (2020): 1-35. <https://doi.org/10.21138/bage.2867>

Environmental Justice Atlas. “EJAtlas – Global atlas of Environmental Justice”. Puede consultarse en: <https://ejatlas.org/>

Galtung, Johan. “Cultural Violence”. *Journal of Peace Research* 27, no. 3 (1990): 291-305.

Galtung, Johan. “Violence, Peace and Peace Research”. *Journal of Peace Research* 6, no. 3, (1969): 167-192.

Galtung, Johan. *Conflict transformation by peaceful means: The transcend method*. UN, 1999.

Galtung, Johan. *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Bilbao, País Vasco: Bakeaz, 1998.

Garibay, Claudio, Boni, Andres, Panico, Francesco y Urquijo, Pedro. “Corporación minera, colusión gubernamental y desposesión campesina. El caso de GoldcorpInc. en Mazapil, Zacatecas”. *Desacatos. Revista De Ciencias Sociales*, no. 44 (2014): 113-142. <https://doi.org/10.29340/44.452>

Grossman, Kenneth. “Environmental racism”. En *The racial economy of science: Toward a democratic future*, editado por Sandra Harding, 326-334. Bloomington: Indiana University Press, 1993.

Gudynas, Eduardo. “Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo”. *América Latina en movimiento* 462 (2011): 1-20.

Gudynas, Eduardo. “Extracciones, extractivismos y extrahecciones”. *Observatorio del Desarrollo*, no. 18 (2013): 1-18.

Guha, Ramachandra. “El ecologismo de los pobres”. *Ecología política* 8, no.2 (1995): 137-151. Recuperado de: <https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2015/12/8.pdf>

Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Mapa de conflictos socioambientales en Chile 2015”. Puede consultarse en: <https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/989>

Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Mapa de conflictos socioambientales en Chile 2018”. Puede consultarse en: <https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1166>

Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Mapa de conflictos socioambientales en Chile 2012”. Puede consultarse en: <https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/478>

Instituto Nacional de Estadística Bolivia. Censo de población y vivienda 2012 Bolivia. La Paz: INE, 2012. Recuperado de [https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Caracteristicas\\_de\\_Poblacion\\_2012.pdf](https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Caracteristicas_de_Poblacion_2012.pdf)

Instituto Nacional de Estadística y Censos República Argentina. “Pueblos originarios”. Puede consultarse en: <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-99>

Instituto Nacional de Estadísticas Chile. Síntesis de resultados CENSO 2017. Santiago: INE, 2018. Recuperado de: <https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf>

Kauffer Michel, Edith. “Pensar el extractivismo en relación con el agua en América Latina: hacia la definición de un fenómeno sociopolítico contemporáneo multiforme”. *Sociedad y ambiente*, no. 16 (2018): 33-57. <https://doi.org/10.31840/sya.v0i16>

Lederach, John Paul. *The little book of conflict transformation*. New York: Good Books, 2014.

Leone, Miguel. “Racionalidades securitarias sobre el pueblo mapuche. Un análisis comparativo de las políticas estatales en Chile y Argentina”. *Temas y Debates*, no. 40 (2020): 89-110. <https://doi.org/10.35305/tyd.v0i40.473>

Martínez-Alier, Joan. *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona: Icaria, 2004.

Méndez, Vicente. “Historia del desarrollo minero argentino”. En *Recursos minerales de la República Argentina*, editado por Eduardo Zappettini, 5-25. Buenos Aires: Instituto de Geología y Recursos Minerales SEGEMAR, 1999.

“No a la Mina”. Puede consultarse en: <https://noalamina.org/>

“Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina”. Puede consultarse en <https://www.ocmal.org>

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. “Base de datos sobre Conflictos Mineros en América Latina”. Puede consultarse en: [https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal\\_db-v2/](https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/)

“Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales”. Puede consultarse en: <https://www.olca.cl>

Ortega Santos, Antonio y Olivieri, Chiara “De Reexistencias en el Sur Global. Aprendizajes de Acción”. En *Saberes bioculturales. En pie de Re Existencias en el Sur Global*, editado por Antonio Ortega Santos y Chiara Olivieri, 9-24. Granada: Editorial Universidad de Granada, 2020.

Randle, Michael. *Civil resistance*. Fontana: Fontana Press, 1994.

Rodríguez, Iokiñe; Inturias, Mirna; Frank, Volker; Robledo, Juliana; Sarti, Carlos y Borel, Rolain. *Conflictividad socioambiental en Latinoamérica*. Ciudad de México: Friedrich Ebert Stiftung, 2019.

Santandreu, Alain y Gudynas, Eduardo. *Ciudadanía en movimiento. Participación y conflictos ambientales*. Montevideo: FESUR, CLAES y Trilce, 1998.

Schock, Kurt. "The practice and study of civil resistance". *Journal of Peace Research* 50, no. 3 (2013): 277-290. <https://doi.org/10.1177/0022343313476530>

Seoane, José. "Modelo extractivo y acumulación por despojo". En *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios*, editado por José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranti, 21-39. Buenos Aires: Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL, 2013.

Sharp, Gene. *Politics of Nonviolent Action, Part Two: The Methods of Nonviolent Action*. Manchester: Porter Sargent Publishers, 1973.

Stephan, Maria y Erica Chenoweth. "Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict." *International security* 33, no.1 (2008): 7-44.

Svampa, Maristella. "Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina". *OSAL*, no. 32 (2012): 15-38.

Temper, Leah; del Bene, Daniela y Martínez-Alier, Joan. "Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas". *Journal of Political Ecology* 22, no. 1 (2015): 255-278.

Universidad de Los Lagos y Universidad de Chile. "Catastro de Conflictos en Chile". Puede consultarse en: [http://proyectoconflictos.ulagos.cl/?page\\_id=8215](http://proyectoconflictos.ulagos.cl/?page_id=8215)

## Mapping Indigenous Civil Resistance Processes to Extractivist Projects in the Southern Andes (1990-2020)

### ABSTRACT

This article aims to study those indigenous resistance processes emerged during socio-environmental conflicts to extractivist projects. It focuses on processes developed in the Andean and pre-Andean areas of Argentina, Bolivia and Chile, from 1990 to 2020. It identifies, especially, those struggles of communities that have resorted mainly to the use of nonviolent action methodologies to achieve their goals. Based on documentary analysis, this investigation has found 129 cases with half of them located in Chilean territory. Mapuche communities are the major indigenous actors in these socio-environmental conflicts and mining is the most relevant extractive activity involved in them. Two demands are key in these conflicts: Improvement of the waste management system in order to repair the damage caused by extractivist projects and respect for the right to consultation and participation in decision-making. Finally, our investigation shows how most of the civil resistance methods implemented in these indigenous struggles belong to the category of protest and persuasion. However, there is a significant use of nonviolent intervention tactics through the development of direct actions too.

**Keywords:** nonviolence; indigenous communities; extractivism; socio-environmental conflicts; environmental justice.

Recibido: 14/08/2021  
Aprobado: 24/11/2021